

Ética y Política

Lic. Hilda Aburto

Ex-Presidenta del Colegio Nacional de Licenciados en
Ciencia Política y Administración Pública



Durante más de 200 años, la diferencia entre los políticos había sido, fundamentalmente, su posición política e ideológica. El universo político de la modernidad quedó marcado de nacimiento: en las asambleas de la revolución francesa se acuñó la denominación de izquierda, derecha y centro para diferenciar las tendencias.

Los partidos políticos se desarrollaron en todos los países de Occidente; se formaron dirigencias centralizadas; nacieron las militancias; se inventó un personaje nunca antes visto: el político moderno, carismático, laico, comprometido con su tiempo; se gestó también la carrera legal y organizada por el poder.

Maquiavelo fue leído durante los siglos XIX y XX, como nunca antes en la historia; lo leyeron dirigentes, militantes,

sindicalistas; sus lecciones ya no sólo fueron para príncipes y consejeros. La política dejó de ser exclusiva para militares y aristocracias de sangre; los obreros, profesionales, periodistas e intelectuales, podían fundar una carrera como políticos y tener éxito. Hacer política se volvió también redituable. Para muchos, un negocio: ganancia, poder, renombre.

Se hicieron comunes los ministros especializados en la propaganda y en el manejo de la personalidad de los líderes; no fueron pocos los políticos que se inventaron. Ser político se hizo deporte, es verdad, el más caro. Entonces estaban bien identificados los adversarios, los fines de cada uno eran diferentes, todos estaban dispuestos a probarse.

Max Weber expuso mejor que nadie la realidad terrenal del político: no debe esperar ganar el cielo, sino adeptos; debe estar dispuesto a caminar los senderos del infierno para lograr sus fines. Realidad llena de cinismo de una tesis aristotélica: "El fin de la política no es el conocimiento sino la acción".

Después de Weber no se ha hecho una revisión completa y novedosa de algo que es fundamental en Occidente: La cultura po-

lítica, específicamente de una, la principal, la cultura de los políticos: sus requisitos, sus virtudes, sus pasiones y hábitos. Sin embargo, se trata de las figuras públicas que hacen la política, y de la calidad de los políticos depende más la calidad de los ciudadanos que a la inversa.

La figura del político ha sido sometida a cambios muy profundos. La tradición liberal dio origen a las prácticas del realismo político y éste, a su vez, aplicó el utilitarismo. La función política fue despojada de requisitos, del saber y de aptitudes; perdió de vista que para ser político debe contarse con lo que algunos han llamado "una naturaleza".

A fines de este siglo parece que el problema central de los políticos y de las clases dirigentes no será su falta de ideas e iniciativas, (por el contrario, se abre una gran gama de posibilidades para diseñar políticas de cambio). El problema de fondo se debe más bien a la insensatez por el abandono de valores y principios éticos en el actual ejercicio de la actividad pública.

Las ideologías ya no son discusión; la incertidumbre del mundo contemporáneo se crea porque un gran número de políticos

han renunciado a ser arquitectos de sus sociedades. Se perfila en el presente una crisis de liderazgos que se erijan en los moderadores de demandas y voluntades: los forjadores del destino de un interés público en el cual ya no creen.

En todo el orbe, muchos políticos se han extraviado como cualquier otra persona; también son afectados por los tiempos de incertidumbre y duda espiritual, pero como conductores sociales; es de mayores consecuencias si quedan atrapados en la ambición, el dispendio, la cólera o la mentira.

Es hora de cambiar al buen Maquiavelo de la cabeceira al librero y recuperar la noción de interés público en su sentido más estricto. Quien quiere los mejores fines debe querer también los mejores medios. Los actos humanos se malogran por exceso o defecto; y esto es particularmente cierto en el caso de los políticos. Si se extravían los políticos será cada vez más fácil que se extravíen las sociedades.

En paralelo a la transformación referida, la función de los gobiernos también ha experimentado cambios de consideración como resultado de las modificaciones que durante este siglo se operaron en el Estado.

El espectro es amplio y conocido; sólo quiero referirme al distanciamiento reciente entre la política y la ética, que se expresa en el asentimiento de la idea de que el gobierno no tiene vinculación ni responsabilidad alguna en la conformación de los valores de su sociedad.

Tal posición, derivada del extremo realismo, de la revolución tecnológica, a lo mejor de la lucha denodada por los mercados, o del combate individual por la supervivencia, ha permeado lentamente en las conciencias de dirigentes y ciudadanos. Pero las crisis hacen más visibles las ausencias.

Nos sentimos como de vuelta en muchas cosas, el *dejávu* que en el nivel social produce confusión y desorientación; nos sacude la urgencia, la obligación de emprender algún proyecto común que le dé sentido al presente y oriente con más claridad el futuro.

Ciertamente hemos conquistado el refugio de la privacidad y los derechos individuales, pero echamos de menos una vida pública más aceptable y más digna de crédito.

La verdad y la razón no son propiedad de nadie, aunque los dueños de las

relaciones económicas actúan como si las poseyeran y se erigen en modelos para el resto del mundo.

Las identidades colectivas se tambalean y la necesidad más perentoria del momento es definir las y afirmarlas. Se trata, en efecto, de una crisis de carácter ético: es la moral pública la afectada.

Porque es la ética política la que habla de la justicia a partir de la desigualdad; es la ética la que orienta los senderos de la democracia, porque no hay hombres tan sabios y capaces para gobernar que puedan evadir el peligro de equivocarse.

Es la ética política la que enseña a valorar lo que merece ser querido; es ella la que conduce socialmente a una labor de discernimiento: distinguir qué debe enseñarse como sustrato de la educación; conocer lo que debe ser tolerado y lo que no; a quiénes hay que apoyar y de qué tiene que hablar el discurso político.

Llegamos así a la pregunta central: ¿Qué tanto es esto competencia de los gobiernos y de los políticos? ¿Hasta dónde es una tarea de la sociedad civil? El sentido común sugiere que son ámbitos complementarios, pero en aquellos paí-

ses que no tienen una sociedad civil fuerte, el peso de la iniciativa recae en las dirigencias políticas.

Es aceptado que los gobiernos contemporáneos se instituyen para moldear el desarrollo, para garantizar seguridad y la vigencia de derechos de la población; vigilar que la expresión de los intereses de unos no atropellen a los otros. La justicia social y la democracia se asumen alternativamente como fines en aquellos países que no han alcanzado un nivel de vida satisfactorio.

Pero va creciendo también la necesidad ética y política de elevar la calidad de los asuntos que se resuelven colectivamente. Si en principio los gobiernos de la posmodernidad se habían abstenido de propiciar las mejores condiciones para el fortalecimiento de la moral pública, hoy, por razones de supervivencia y legitimación, tendrán que asumirlo como tarea.

Si bien en nuestro mundo ocupa más espacio la vida privada, la crisis del presente nos alerta sobre ese espacio público del que no es lícito desentenderse. Quiéralo o no, el individuo se encuentra sometido a los imperativos de una legislación, a la normatividad que impone una administración pública, a las decisiones y

servicios de un gobierno, pero sobre todo, tropieza cotidianamente con una serie de problemas, conflictos y carencias que sólo pueden ser tratados y resueltos colectivamente. Ahí reside el valor de la cultura democrática. También es expresión de la moral social que, aún en condiciones de un gran pluralismo y diversificación de grupos, representa la confluencia en un punto de vista respecto a la necesidad de defender ciertos derechos,

fundamentales para todos y cada uno de los seres humanos. Y si la atención de tales derechos es auténtica, ha de generar, en consecuencia, actitudes y disposiciones concretas para la acción social.

Se podría decir entonces que hay que proceder a trazar nuevos derroteros en la función del gobierno, que no consideró la reforma del Estado: el fortalecimiento de los ámbitos públicos en torno

a una ética política que recupere lo fundamental de la vida social, la integración y no la desunión de los mexicanos por objetivos comunes y viables de un proyecto nacional.

Es indiscutible que el individualismo es una conquista de la modernidad, paralela a la conquista de la libertad y a la proclamación de unos derechos humanos que son, en definitiva, derechos individuales. Su



vigencia, no obstante, afecta a "lo otro", a los demás, e incide directamente en la actualización de las instituciones políticas y en un rediseño del sistema político.

Si las instituciones políticas han de orientarse a la construcción de proyectos para el interés común, periódicamente tenemos que revisar en qué medida nuestras instituciones funcionan para el cumplimiento de ese cometido.

En ese edificar y reformar instituciones, tal vez hemos olvidado que ellas están directamente vinculadas a los fines del hombre. Recordemos, como decía John Stuart Mills: "que las instituciones políticas (aunque esta proposición parezca a veces ignorarse) son obra de los hombres, que deben su origen y toda su existencia a la voluntad humana. Los hombres no las han encontrado formadas de improviso al despertarse una mañana.

No se parecen tampoco a los árboles que, una vez plantados, crecen siempre, mientras los hombres duermen. En cada periodo de su existencia la acción voluntaria del hombre las hace lo que son".

Cuando un sistema político no se sustenta en instituciones sólidas, sino en prácticas viciadas, permea a la administración pública, la determina y condiciona el ejercicio cotidiano del servicio



público. Las crisis e incapacidades en uno provocan alteraciones graves en la otra con efectos directos a la sociedad. Asimismo, se trata de un problema ético porque la función pública es, ante todo, la administración de recursos y fines de carácter público.

Esta es una de las áreas en las que hay que efectuar profundas revisiones y formular planteamientos muy drásticos para profesionalizar el ejercicio de la gestión pública y vincularla con una auténtica vocación de servicio. No es

dádiva ni materia de acuerdos; lo que sucede es que hemos olvidado que el servicio público es inherente a la función de gobierno.

Nada impide que un empresario o comerciante quiera convertirse en político; los ha habido muy buenos. La perversión reside en comerciar con la política (los intereses públicos), que ésta tenga precio y se venda al más rico.

Todo ciudadano tiene derecho a aspirar a la función de gobierno, una presidencia municipal, una gubernatura

o una diputación, pero alguien debe recordarles que la capacidad de gobernar no se aprende sobre la marcha.

La administración pública debe abandonar la improvisación; requiere representatividad, conocimiento y trayectoria; reconocer el valor de los consensos, liderazgos y conflictos, particularmente por los tiempos que se anticipan. La función de gobernar va más allá de las aspiraciones íntimas; es responsabilidad social y como tal debe ser aquilatada.